

sistema. En ellas, entre otras cuestiones, la autora reclama la necesidad de diseñar una Directiva europea de violencia contra la infancia y la adolescencia que armonice los delitos que pueden ser cometidos contra los menores, de forma similar a lo ocurrido con la violencia contra las mujeres con la reciente Directiva 2024/1385, de 14 de mayo de 2024. Propone, además, considerar una modificación del Reglamento Bruselas II ter para obligar a los tribunales del Estado miembro de la residencia habitual del menor antes del traslado lícito a la cesión de su competencia a los tribunales que conozcan del delito antes o después del traslado del menor (siempre que se haya interpuesto primero la denuncia o querella). De igual manera, defiende que la ley aplicable para la adopción de las medidas provisionales/cautelares de protección del menor, también sea arrastrada por los criterios aplicables a las infracciones penales contra el menor. Todo ello con el objetivo de evitar problemas de aplicación o adaptación de tales medidas provisionales o cautelares en fase de reconocimiento y ejecución.

Finalmente, un valor añadido importante de la monografía son los anexos que acompañan la obra. Lejos de ser

meros añadidos, contienen información exhaustiva sobre derecho comparado y legislación autonómica española. Estos materiales dotan al texto de un carácter aplicado que lo convierte en una herramienta útil no solo para investigadores, sino también para los operadores jurídicos.

En definitiva, se trata de una obra altamente recomendable, tanto por la originalidad de su enfoque como por su análisis jurídico. El planteamiento de la Dra. Serrano Sánchez centrado en la prevención, su estudio riguroso de los instrumentos jurídicos vigentes, y su voluntad de contribuir a una mejora respecto del sistema actual, hacen de este trabajo un referente para el desarrollo de un Derecho Internacional Privado sensible a las dinámicas de violencia y a la protección efectiva de los derechos de la infancia. En este contexto, sus propuestas representan una innovación doctrinal, y suponen una llamada a una mayor coherencia, sensibilidad y eficacia en la respuesta del Derecho a la violencia ejercida en el entorno más íntimo de los menores: la familia.

María del Carmen CHÉLIZ INGLÉS
Universidad de Zaragoza

TORRES CAZORLA, María Isabel, y GARCÍA RICO, Elena del Mar (dirs.), BAUTISTA-HERNÁEZ, Andrés, y PASTOR GARCÍA, Alicia María (coords.), *Medio ambiente, seguridad y salud: grandes retos del derecho en el siglo XXI*, Editorial Tirant Lo Blanch, Colección Monografías Maior, Valencia, 2024, 336 pp.

Las relaciones entre la conservación del medio ambiente y la protección de la salud, así como sus vínculos con cuestiones de seguridad inquietan desde hace ya décadas a los especialistas e investigadores de varias disciplinas. La elaboración de ideas como el derecho humano al medio ambiente, la subjetividad de las futuras generaciones o las nociones de

seguridad humana, seguridad ambiental o los conceptos más recientes de *Una sola salud* o *Un solo bienestar* son buena prueba de esa preocupación y muestran los intentos doctrinales por desenredar las relaciones y la interdependencia entre estos ámbitos. Entre esas aportaciones doctrinales a los debates de la academia acerca de dichas interacciones hay

que destacar los trabajos de María Isabel Torres Cazorla y Elena del Mar García Rico. Efectivamente, ambas profesoras han dedicado buena parte de su fructífero esfuerzo investigador a los temas referenciados, mostrando que su interés por ellos no es reciente ni eventual. Precisamente, en la actualidad, ambas profesoras participan en el proyecto de investigación *Medio ambiente, seguridad y salud: nuevos retos del Derecho en el siglo XXI*, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por la doctora Torres. En el marco de este proyecto, las profesoras Torres y García han dirigido la obra colectiva titulada *Medio ambiente, seguridad y salud: grandes retos del derecho en el siglo XXI*.

En la publicación colaboran prestigiosos especialistas españoles y extranjeros que participan en dicho proyecto de investigación, siendo todos los autores profesores o investigadores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. La procedencia de los autores determina que el enfoque adoptado en todo el libro sea necesariamente un enfoque desde dichas disciplinas, lo que dota de una particular coherencia a la obra. El libro reúne siete contribuciones y está estructurado en torno a tres partes temáticas, la primera parte titulada *Medio ambiente*, la segunda *Seguridad* y la tercera *Salud*, aunque los tres elementos mencionados están presentes, en mayor o menor medida, en todas las contribuciones. En cualquier caso, la estructura elegida facilita una lectura organizada de los trabajos. Las directoras de la publicación introducen las contribuciones de los autores con una breve presentación de las cuestiones fundamentales de la obra y adelantando su distribución y parte del contenido e indicando el objetivo que pretende la misma: acercar a la sociedad algunos de “los desafíos presentes y futuros que nuestro medio ambiente, nuestra seguridad y salud nos demandan”.

Parte 1. Medio ambiente. En la contribución “¿Demasiado poco, demasiado lento? La importancia de la protección del medio ambiente ante la Corte Internacional de Justicia”, la investigadora principal analiza brillantemente la cuestión de la conservación del medio ambiente en las sentencias y las opiniones consultivas de la Corte a la luz de la solicitud de una opinión sobre las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático. La autora nos adelanta en el título del trabajo que la obra de la Corte ha sido escasa y sus ritmos lentos y destaca que la conservación del medio ambiente es una preocupación accesorio en dichas opiniones y sentencias y que aparece en ellas vinculada a temas conexos y a la cuestión de la utilización de un recurso natural por los Estados soberanos. Respecto de la solicitud de opinión consultiva sobre el cambio climático, la profesora Torres analiza con rigor los términos de esta, señalando con muy buen juicio que la participación en el procedimiento de varias organizaciones de diferente naturaleza enriquecerá los debates y que el dictamen es buena prueba de que la “justicia climática” está más activa que nunca.

“La protección de las generaciones futuras como transformadora del derecho internacional y garantía del entorno de quienes nos sucederán” es el título del segundo capítulo y está firmado por Nicolás Carrillo Santarelli y Francesco Seatzu, ambos miembros de la *Università degli Studi di Cagliari*. Esta contribución aborda la idea de la constitución de las futuras generaciones como un sujeto innovador destinatario del derecho. Dotar de subjetividad a las generaciones futuras, entendidas como los seres humanos que aún no existen y existirán en el futuro, es decir, a una entidad sin preexistencia ontológica, permitiría protegerla ante los riesgos y daños derivados del deterioro del medio ambiente que no se manifestarán durante nuestras vidas. Los

autores examinan pormenorizadamente los argumentos, debates y dilemas relativos a dicha propuesta, afirmando que dicha protección es posible y que las generaciones futuras pueden ser sujetos del derecho contemporáneo en los sistemas jurídicos internos o internacionales, aunque dicha protección no tiene por qué ser idéntica a la de otros sujetos de derecho. En opinión de los autores, un buen ejemplo de lo anterior, son los casos del río Atrato en Colombia o el río Whanganui en Nueva Zelanda, reconocidos como sujetos de derecho en decisiones judiciales o parlamentarias.

Parte 2. Seguridad. El profesor Rolán Barbero se ocupa de las relaciones conflictuales generadas a partir de la degradación del medio ambiente en el capítulo “El medio ambiente y la conflictividad internacional”. El autor, un reconocido especialista en estos temas, estudia lúcidamente desde un enfoque panorámico las caras de los conflictos ambientales, iniciando su trabajo con el análisis de la relación entre el medio ambiente y los conflictos internos. En su contribución afirma que la paz social y la paz territorial dependen cada vez más de la gestión de los recursos naturales. El resto del capítulo está dedicado a las dimensiones internacionales de las cuestiones ambientales, que alcanzan su clímax en los conflictos armados internacionales. El autor nos recuerda acertadamente que los desafíos ambientales y securitarios pueden matar masivamente y que el cambio climático es un multiplicador de amenazas terribles y postula una *ecotopía*, un acuerdo de paz con la naturaleza.

En la contribución titulada “El Derecho Internacional frente a los riesgos de las Neurotecnologías”, el profesor Daniel García San José introduce un tema emergente —las neurotecnologías— y analiza con claridad y con una visión global y muy coherente las interacciones

de las neurotecnologías y la inteligencia artificial, sus riesgos para los derechos y libertades fundamentales, las prioridades éticas de su gestión y los desafíos que surgen para la gobernanza internacional de dichos riesgos. Tras repasar las propuestas de expertos para regular la materia y concluir que la autorregulación es insuficiente, el autor afirma que la regulación debe ser de alcance universal y jurídicamente vinculante y estar basada en una serie de principios rectores consensuados en el seno de la comunidad internacional. Además, propone la creación de un alto comisionado de las Naciones Unidas para el uso responsable de la inteligencia artificial en las neurotecnologías como mejor vía para implementar dichos principios.

La profesora Elena del Mar García Rico es la autora del siguiente capítulo, “Seguridad y salud: a propósito de las sanciones unilaterales en situaciones de vulnerabilidad sanitaria”. En él aborda con rigor y profundidad la cuestión de la legalidad de las sanciones unilaterales desde la perspectiva de la protección del derecho a la salud en situaciones de vulnerabilidad sanitaria, examinándolas también a la luz del régimen jurídico de las contramedidas y del contenido y alcance del derecho a la salud en la actualidad. Es una cuestión compleja, de naturaleza aristada y extraordinariamente controvertida que dificulta el estudio coherente de la misma. No obstante, la autora supera brillantemente este reto y nos ofrece un análisis esclarecedor de las cuestiones imbricadas, concluyendo que la adopción de sanciones unilaterales que restringen el suministro de equipos médicos y de asistencia sanitaria y medicamentos resulta difícilmente compatible con la obligación de cualquier Estado de respetar el derecho humano a la salud física y mental, incluyendo el acceso equitativo a la asistencia médica y los servicios de salud, sobre todo en un

contexto de especial dificultad y riesgo sanitarios.

Parte 3. Salud. En esta última parte encontramos las contribuciones de dos profesores de la *Universitat de València*, José Manuel Sánchez Patrón y Jorge Climent Gallart. “La declaración de ‘emergencia de salud pública de importancia internacional’ ante las pandemias es el interesante y actual trabajo que aporta José Manuel Sánchez. En él examina la configuración de este mecanismo declarativo de la Organización Mundial de la Salud, con particular referencia al instrumento en el que se regula dicho mecanismo, el Reglamento Sanitario Internacional (2005), un documento jurídicoamente vinculante que incluye las medidas para prevenir la propagación internacional de enfermedades infecciosas. A la luz de la aplicación del mecanismo a la crisis de la COVID-19 el autor examina certeramente las insuficiencias y disfunciones de este y las diferentes propuestas para la revisión del Reglamento, que fue finalmente enmendado el 1 de junio de 2024 por la Asamblea Mundial de la Salud. Aunque este trabajo es anterior a esa fecha, la investigación del profesor Sánchez Patrón es particularmente útil para entender los debates sobre la revisión del Reglamento y las enmiendas finalmente aprobadas. Por otro lado, el autor también se ocupa en su capítulo de los aspectos relevantes para estas cuestiones de las negociaciones del acuerdo sobre prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias. La actualidad y relevancia del tema elegido por el autor para su contribución queda confirmada no solo por la referida aprobación del Reglamento enmendado, sino también por la adopción el 20 de mayo de 2025 del Acuerdo sobre las pandemias. Quedamos a la espera de un nuevo trabajo del profesor Sánchez en el que nos ilustre sobre las nuevas regulaciones, sus interacciones y eventuales contradicciones.

En el último capítulo de esta obra colectiva, “La respuesta incompleta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la esterilización forzosa de las mujeres romaníes”, el profesor Climent aborda críticamente una cuestión particularmente estremecedora por la gravedad de los hechos y por la reiteración de los mismos: las esterilizaciones forzosas de mujeres romaníes realizadas por las autoridades médicas de Eslovaquia, cuestión abordada en diversas sentencias del TEDH. El autor analiza con carácter preliminar varios aspectos del Convenio de Oviedo para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina, con particular atención al consentimiento informado previo. El autor nos recuerda oportunamente que el derecho a la salud no está consagrado de manera autónoma en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, aunque el Tribunal ha contribuido a su protección a través de sentencias relativas otros derechos, como el derecho a la vida. En la parte principal de su trabajo el profesor Climent desgana con detalle los pronunciamientos del Tribunal en los asuntos referidos, que reconocen la violación del derecho a la vida privada y familiar y del derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. Es particularmente interesante el epígrafe relativo a la falta de apreciación de vulneración del derecho a no sufrir discriminación por parte del Tribunal ya que en él el autor analiza dicho pronunciamiento, indicando muy acertadamente que debería haberse reconocido dicha vulneración al tratarse de una discriminación múltiple interseccional, es decir, una discriminación basada en el sexo y en la etnia. Cabe destacar también que las conclusiones del profesor Climent cierran brillantemente tanto el capítulo como la obra colectiva.

Las directoras han logrado articular una obra coherente en la que se entrecruzan distintas líneas temáticas bajo un enfoque común. El volumen es un signo del interés que las relaciones entre el medio ambiente, la salud y la seguridad animan en la doctrina internacionalista y supone una valiosa y sólida aportación al análisis de algunos de los grandes desafíos contemporáneos que enfrenta la comunidad internacional en relación con estos temas, siendo además buena prueba

tanto del compromiso académico y personal de los autores como de la calidad científica de su esfuerzo investigador. En su conjunto, el libro constituye indudablemente una lectura de referencia ineludible para cualquier interesado en estos ámbitos del derecho y de la política internacional y, desde luego, para los investigadores y profesionales del derecho.

Roberto PÉREZ SALOM
Universitat de València